

Michael Löwy y Eder Sader
**La militarización
del Estado
en América Latina**

América Latina es el continente clásico de los pronunciamientos y de las juntas militares.

En efecto, las dictaduras militares son un rasgo característico de su historia política, desde los caudillos militares que dirigieron los procesos de emancipación nacional a inicios del siglo XIX (Bolívar, San Martín, O'Higgins, etcétera). A partir de aquella época, las dictaduras militares siempre han sido uno de los recursos utilizados por las clases dominantes para imponer su orden en las épocas de crisis.

Después de la independencia, los regímenes militares constituyeron el medio de acabar con las resistencias colonialistas. Luego, esos regímenes fueron el medio para reprimir las tendencias "plebeyas" que en el seno de los movimientos de emancipación, amenazaban a la sociedad oligárquica. Por último, fueron el medio para imponer la formación de Estados nacionales en contra de las tendencias separatistas de las fracciones oligárquicas más atrasadas. Con el establecimiento del nuevo orden, el papel desempeñado por los caudillos terminó, y éstos dejaron paso a sistemas políticos más estables y más representativos del conjunto de las oligarquías.¹

A partir del principio de este siglo, cuando la economía primaria exportadora empieza a presentar los síntomas de una crisis profunda y las luchas sociales que la hacen peligrar se vuelven más violentas, los regímenes militares se convertirán en el instrumento de salvaguardia de los intereses establecidos. Ya no se trata de imponer un nuevo orden sino de defenderlo y mantenerlo. Por esta razón, las tiranías militares se vuelven la norma en esas regiones más atrasadas.

Cuando el proceso de urbanización provoca un ensanchamiento de las bases del poder político, los líderes de un movimiento antioligárquico surgirán a menudo de entre los cuadros militares, como en el caso de los *tenentes* (tenientes) brasileños de los años 20, Marmaduke Grove en Chile en 1932, Arbenz en Guatemala en 1944.

A finales de la segunda guerra mundial, ya consolidados los cambios acaecidos, en general, durante los años 30 y debido al impacto de la ideología democrática que condujo a la victoria antinazi, el número de dictadores militares disminuye notablemente. El sociólogo

¹ Véase Halperin Donghi, *Historia contemporánea de América Latina*. Ed. Alianza, Madrid, 1969.

norteamericano E. Lieuwijn cuenta para el año 1947 no más de siete gobiernos dirigidos por oficiales del ejército de un total de 20.²

Sin embargo, durante los últimos quince años, asistimos a una multiplicación sin precedente de regímenes militares, a una eliminación progresiva de los gobiernos "democráticos representativos" y a una irrupción masiva del cuerpo de oficiales en la escena política. Junto a países gobernados con frecuencia por militares (Bolivia, Centroamérica, etcétera), hallamos otros que, por el contrario, tenían largas tradiciones "cívicas". Brasil, en cuya historia nunca se había dado un régimen militar *stricto sensu* (el Estado Nuevo de Getulio Vargas, 1937-1945, no era, hablando con propiedad, una dictadura militar), está gobernado desde hace once años por las fuerzas armadas; Chile y Uruguay, que tenían una tradición democrática parlamentaria de tipo europeo (o de veleidad europea), también se encuentran sometidos a un poder militarizado.

Podemos definir como "poder militar" una forma de Estado en que la jerarquía militar (el cuerpo de oficiales superiores y medios) ocupa el primer plano de la escena política, *i.e.*, controla los cargos esenciales del gobierno y los pináculos del aparato de Estado (ministerios, grandes empresas de Estado, administración, etcétera).

A partir de esta definición, se puede observar que la aplastante mayoría de la población del continente vive actualmente bajo un régimen militar.

¿En qué consiste precisamente la militarización del Estado o la politización del ejército? Según el sociólogo norteamericano antes mencionado, hay que deshacerse del mito según el cual las fuerzas armadas en América Latina son una institución esencialmente militar: "Se torna evidente que esto es erróneo cuando examinamos sus funciones reales. Hay dos —y tan sólo dos— funciones militares legales para una organización de las fuerzas armadas, a saber, defender la nación contra la agresión externa y defender al gobierno preservando el orden interior." Ahora bien, según Lieuwijn, las fuerzas armadas latinoamericanas no se enfrentan a ningún enemigo exterior y, antes que defender los gobiernos constitucionales, tienden con mucha frecuencia a derribarlos ...³ A nuestro parecer, esta distinción no es lo suficientemente significativa: ambas acciones, la de defender al gobierno y la de derribarlo, son *políticas*. No se puede definir como "puramente militar" y "apolítica" una intervención del ejército para defender un gobierno "constitucional", ya sea por una acción represiva (la matanza de Tlatelolco en México en 1968) o mediante un levantamiento democrático (la insurrección "constitucionalista" de la República Dominicana en 1965).

² Véase E. Lieuwijn, *Militarismo e política na America Latina*. Ed. Zahar, Río de Janeiro, 1964, p. 8.

³ E. Lieuwen, *General vs. President: neo-militarism in Latin America*. Ed. Praeger, Nueva York, 1964, p. 95.

La militarización del Estado no consiste pues en el paso de lo "puramente militar" a lo "político", sino en el desbordamiento de las fuerzas armadas hacia el conjunto del aparato de Estado, la "colonización" de la mayoría de las estructuras estatales y paraestatales (en la cúspide de la pirámide) por los militares, la fusión total o parcial entre los aparatos represivos y los demás aparatos del sistema de dominación política.

Esta militarización puede tomar la forma abierta y explícita del régimen militar propiamente dicho, pero también formas más mediatizadas, más "subterráneas" en las que las fuerzas armadas no ocupan el primer plano de la escena política, no "gobiernan" directamente, sino que ejercen entre bastidores un control más o menos estrecho sobre los detentadores formales del poder, u ocupan progresivamente algunas de las estructuras estatales: administración de ciertas regiones "vitales", extensión "ilimitada" de la justicia militar, etcétera. Tal es en particular el caso de Colombia actualmente.

Por lo general, se designan los regímenes militares y las dictaduras civiles con el concepto de *Estado de excepción*. Esta terminología nos parece muy cuestionable en la medida en que parece considerar implícitamente al Estado "constitucional", democrático (formal) o parlamentario como *la norma* y al Estado militar como *la excepción*. Ahora bien, la historia de América Latina desde la independencia hasta el siglo XX, y sobre todo durante los últimos quince años (y esto es válido también para Asia, África y Europa del sur), tiende a sugerir precisamente *la hipótesis contraria*: la "norma" es la dictadura militar o civil, la excepción, el régimen representativo constitucional. El sociólogo Heinz Sonntag, en su excelente artículo acerca de las formas del Estado en América Latina, reconoce esta dificultad y trata de evitarla mediante el concepto de *Estado de excepción permanente* en América Latina. Pero a nuestro parecer existe aquí una contradicción "*in adjecto*": si la excepción se vuelve permanente, deja de ser excepción...

Más allá de la divergencia terminológica, se plantea un problema de fondo: el hecho de que el ejercicio del poder de las clases dominantes en América Latina (y en otras partes) exige la utilización habitual y constante (y no excepcional) de la coerción como forma principal de dominación.

Gramsci definía al Estado como una "hegemonía blindada de coerción", comprendiendo la hegemonía como el conjunto de las estructuras e instituciones capaces de manejar un consenso social en torno a la clase dominante.⁴

⁴ Gramsci, *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Ed. Juan Pablos, México, 1975, p. 165.

Esas estructuras, los "aparatos ideológicos" (escuela, Iglesia, partidos políticos, prensa, radio, etcétera), nunca pueden garantizar por sí solos la dominación y exigen siempre la presencia de una "garantía última" del orden social, en la forma de instrumentos de coerción, los "aparatos represivos" (ejército, policía, fuerzas paramilitares, etcétera), Empero, en la medida en que el equilibrio entre esas dos estructuras se rompe y el eje del poder se desplaza claramente hacia los aparatos represivos, se puede hablar de "Estado de dominante coercitiva", término provisional que preferimos al concepto equívoco de Estado de excepción.

En América Latina, el carácter explosivo de las contradicciones sociales provocó constantemente desplazamientos de esa índole. Sin embargo, durante los últimos quince años, asistimos a una nueva etapa histórica, caracterizada por la extensión de los Estados de dominante coercitiva en la mayor parte del continente, a consecuencia de una profunda *crisis de hegemonía*: los aparatos ideológicos, incapaces de desempeñar acertadamente el papel de generadores de consenso, se ven apartados o absorbidos en provecho de los aparatos represivos y en particular de las fuerzas armadas. La escuela, la Universidad, la Iglesia y los partidos políticos padecen unas crisis cada vez más intensas y ven aparecer en su seno focos de impugnación ideológica del orden establecido. La excepción más notable es la de México, donde el complejo conjunto de los aparatos encargados de difundir la ideología oficial de la revolución mexicana —dominados por el PRI, Partido Revolucionario Institucional— ha sido capaz de garantizar una adhesión (o neutralización) constante de las clases populares, volviendo poco frecuente el recurso masivo a los instrumentos coercitivos (¡1968!).

Es importante recalcar que la militarización del Estado no significa en absoluto un uso *exclusivo* de la coerción como forma de dominación; los aparatos ideológicos no sólo siguen desempeñando su papel, sino que el propio ejército ejerce todavía un papel igualmente ideológico al transmitir un cierto número de temas que varían según la coyuntura: desarrollo económico, unidad nacional, defensa contra la subversión, etcétera. En realidad, hay que distinguir entre el concepto de "régimen militar" y el de Estado de dominante coercitiva: no siempre coinciden. Existen regímenes militares en que la coerción no desempeña un papel más importante que en un Estado llamado "constitucional" (Perú) y, en cambio, algunos regímenes "civiles" pueden basarse casi exclusivamente en la represión y el terror (Haití).

Para comprender la conducta de los militares en el poder, es preciso subrayar que no constituyen ni una clase ni una "casta" y que su práctica política no puede explicarse completamente por su origen social. Así, el predominio de la oligarquía agraria en la jerarquía de la marina y la composición pequeñoburguesa de la del ejército de tierra —para dar un ejemplo frecuente en América Latina—a veces puede ayudar a entender las diferencias de

comportamiento y aun los conflictos entre diferentes ramas de las fuerzas armadas. No obstante, más allá del mito, "la unidad de las fuerzas armadas" remite a un fenómeno real: el hecho de pertenecer a una *categoría social* común. Una categoría social es un grupo que se define por su relación con instancias extraeconómicas de la estructura social, ya ideológicas (intelectuales, estudiantes), ya políticas (burócratas, militares). Ahora bien, así como existe cierta unidad en la conducta de los estudiantes, independientemente de su origen social, existe en toda categoría social cierta comunidad extra-clasista, determinada por las relaciones comunes con los aparatos ideológicos y políticos. Por lo tanto, los militares, en calidad de cuadros dirigentes del aparato coercitivo del Estado, constituyen una categoría social relativamente homogénea, cuyo comportamiento se define en amplia medida por esa determinación específica. De ello resulta una relativa autonomía del Estado militarizado, con respecto a las clases dominantes, aun si siempre es, en última instancia, la salvaguardia del orden establecido por esas clases. Esa autonomía es más amplia en las formas de Estado llamadas "bonapartistas", en que los militares se presentan en la escena política como árbitros por encima de las clases, y más reducida en los regímenes en que, por mediación de un complejo militar-industrial y/o por la cooptación de los generales en los consejos de administración, se produce una verdadera fusión social entre los militares y la clase de los empresarios (Brasil).

Por consiguiente, el origen social pequeñoburgués de la gran mayoría de los cuadros profesionales de los ejércitos latinoamericanos no es, contrariamente a los análisis habituales de la "sociología militar" norteamericana, un dato decisivo *salvo* cuando el aparato militar entra en crisis y la unidad artificial de los cuarteles deja paso a conflictos entre las clases sociales que cunden en la institución armada.

LOS FACTORES DE LA MILITARIZACION DE LOS REGÍMENES LATINOAMERICANOS

Tras esa tendencia a la militarización de los Estados latinoamericanos, se halla un proceso de profundas modificaciones en las relaciones sociales. Por un lado, el desarrollo capitalista que se lleva a cabo en los países más importantes entre los años 50 y 60 exige nuevas formas de acumulación del capital. Por otro, las luchas políticas experimentarán a partir de la Revolución Cubana una nueva fase en sus enfrentamientos, al tener nuevos objetivos, nuevas alianzas y nuevas formas de expresión.

Resulta evidente que no existe separación estricta en la práctica entre factores económicos y políticos. El paso a un nuevo modelo de acumulación capitalista no es un fenómeno puramente económico, Las *nuevas condiciones de explotación de la fuerza de trabajo* que aporta introducen a los factores políticos de su realización. Se vuelven nefarias nuevas relaciones entre las clases: Pero el modelo de acumulación que se plasmará será la resultante de esas relaciones sociales, establecidas según la capacidad que tiene cada clase, estrato o fracción de clase para imponer sus intereses. La distinción entre factores económicos y factores políticos no tiene por objetivo establecer una diferencia nítida entre esos dos niveles, lo cual va en contra de su propia esencia. Al aclarar la especificidad de ambos factores, el propósito es esclarecer las condiciones particulares de cada situación.

El Estado, en calidad de centro de poder en la sociedad, es la expresión dominante de las relaciones sociales establecidas. Resultante de la fase de acumulación capitalista y de las relaciones entre las diferentes fuerzas en la lucha de clases, el Estado es, simultáneamente, el instrumento de las clases dominantes para consolidar o modificar un modo de acumulación y para consolidar o modificar el equilibrio de las fuerzas sociales dadas. Por esta razón, el Estado, la lucha de clases y la acumulación de capital se penetran mutuamente en todos los niveles. Cada uno de esos fenómenos aparece dentro de la configuración de los demás, y el todo constituye lo que llamamos "la formación social".

¿Cuáles son las causas que explican ese viraje hacia la militarización del Estado en América Latina desde el principio de los años 60?

Es evidente que la revolución cubana es uno de los acontecimientos históricos decisivos para comprender esta evolución. La revolución cubana afectó hondamente los sistemas de dominación tradicionales, al desencadenar o intensificar una crisis de hegemonía sin precedente en el continente. Esta última alcanzó al conjunto de los aparatos ideológicos — escuela, Iglesia, partidos políticos— en grado variable, según los países y los periodos. Dicha crisis revistió diversas formas: extrema radicalización del movimiento estudiantil, aparición de una corriente cristiana revolucionaria en el seno de ciertos sectores del clero, escisiones rebeldes de diferentes partidos "populistas" tradicionales (APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela), etcétera.

Como resultado combinado del desarrollo económico y del impacto de la revolución cubana, se presenciara en América, Latina una intensificación significativa de las contradicciones sociales. Sobrevendrá, la irrupción de estratos sociales hasta entonces desorganizados (campesinado), el desarrollo de la "politización" de los conflictos industriales,

la aparición de las fuerzas radicales de oposición al statu quo, la impugnación de la autoridad y de la disciplina en el seno de las propias fuerzas armadas, etcétera.

Para arrostrar esas múltiples amenazas y para suplir al sistema de hegemonía desfalleciente, un Estado militar y/o de primacía coercitiva sustituirá al Estado "constitucional", con el remplazo del personal político tradicional por los cuadros del ejército. Podríamos invertir la fórmula de Gramsci y hablar del Estado como una coerción envuelta de hegemonía; cuando la capa protectora (los aparatos ideológicos) se disuelve o se adelgaza, el núcleo coercitivo lo detecta y aflora.

Estos factores político-sociales e ideológicos se combinan con una determinación fundamental, de índole económica: el nuevo modo de acumulación del capital en América Latina y sus implicaciones al nivel del Estado.

Así, partimos de las características predominantes en el proceso de desarrollo capitalista latinoamericana del periodo precedente, a saber, *grosso modo*, desde la primera guerra mundial hasta finales de los años 40. La larga crisis del mercado mundial creó en ese periodo condiciones favorables para el cambio del centro motor de las economías latinoamericanas, que del sector primario exportador se vuelve al sector industrial interior. Parecía que la ruptura entre la producción y el consumo tan característica de las economías periféricas⁵ estaba desapareciendo. La reducción de las exportaciones latinoamericanas, cuya consecuencia fue una contracción de la capacidad de importar de esas economías, libera por un lado recursos monetarios y, por otro, consumidores para el desarrollo de una industria de tipo "sustitución de las importaciones".⁶

Este proceso de industrialización arranca en las ramas de producción de los bienes de consumo final, menos desarrolladas tecnológicamente, aprovechando la abundancia de la fuerza de trabajo y las disponibilidades locales de materias primas. Los sectores más adelantados son las industrias textiles y alimentarias. El crecimiento de esas ramas, llamadas de "bienes salarios", implicará el aumento de la demanda de los asalariados.

Sin embargo esto no quiere decir que la ruptura ya mencionada entre las esferas de la producción y del consumo tienda a reabsorberse. Al producirse el proceso de industrialización

⁵ Véase Celso Furtado, *La economía latinoamericana*. Ed. Universitaria, Santiago, y Ruy Mauro Marini, *Dialéctica de la dependencia*, Ed. Era, México, 1973.

⁶ Véase Celso Furtado, op. cit.; Maria da Conceição Tavares, *Auge e declino do processo de substituição de importações ao capitalismo financeiro*, Ed. Zahar, Río de Janeiro, s.f.; Ruy Mauro Marini, op. cit., y *Subdesarrollo y revolución*, Ed. Siglo XXI, México, s.f.; Antonio Barros de Castro, "O modelo histórico latinoamericano", in *Sete ensaios sobre a economia brasileira*, Ed. Forense, Río de Janeiro, 1968; André Gunder Frank, *Capitalisme et sous-développement en Amérique Latine*, Ed. Maspero, Paris, s.f.; M. Peralta Ramos, *Etapas de la acumulación capitalista y alianzas de clase en la Argentina (1930-1970)*, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires; A. Pinto, *Chile: tan caso de desarrollo frustrado*, Ed. Universitaria, Santiago.

latinoamericana sin romper con la base primaria exportadora, el modo de producción y de circulación deberán adaptarse a esa base. Expliquémonos.

Las burguesías industriales latinoamericanas se habían formado en calidad de apéndices de los sistemas primarios exportadores. Las divisas necesarias para la importación de las máquinas provenían de las exportaciones. Las condiciones de apropiación monopolista de la tierra engendraban una importante reserva de mano de obra encargada de suministrar fuerza de trabajo a bajo precio. La demanda del sector primario exportador constituía a menudo, en su mayor parte, el mercado consumidor para las industrias locales.

A partir de la crisis de 1929, la alteración de las condiciones del mercado mundial produjo cambios significativos en los sistemas de poder en América Latina. Por una parte, éstos incitan a la industrialización; por otra, la ausencia de una burguesía industrial políticamente independiente de la base rural determina la aparición de un poder de compromiso en el cual unos gobiernos apoyados en una amplia base social defenderán los intereses industriales, lo cual les permite inclinar progresivamente el fiel de la balanza hacia la industria, a partir de un pacto fundamental con la antigua oligarquía. Vargas en Brasil en 1930, Cárdenas en México en 1934, el gobierno liberal en Colombia en 1934, el Frente Popular en Chile en 1938, Perón en Argentina en 1945, orientan de nuevo la acción del Estado con miras a favorecer las condiciones necesarias para la creación de un mercado interior. Todos esos regímenes son diferentes unos de otros debido a las diversas alianzas y a las diferentes relaciones de fuerzas, así como a la diversidad de las etapas del proceso de desarrollo en las que se establecieron. Pero todos tienen en común el ser promotores de un proceso de industrialización extensiva, al fortalecer el papel del Estado y al incorporar nuevos contingentes de mano de obra en el mercado del trabajo urbano, sin romper la relación de dependencia creada por la economía primaria exportadora que les proporciona las divisas necesarias para las importaciones. Esto induce a que Ruy Mauro Marini afirme:

Arrancando pues del modo de circulación que caracterizaba a la economía exportadora, la economía industrial dependiente reproduce, en forma específica, la acumulación de capital basada en la superexplotación del trabajador. En consecuencia, reproduce también el modo de circulación que corresponde a ese tipo de acumulación, aunque de manera modificada; ya no es la disociación entre la producción y la circulación de mercancías en función del mercado mundial lo que opera, sino *la separación entre la esfera alta y la esfera baja de la circulación en el interior mismo de la economía*, separación que, al no

ser contrarrestada por los factores que actúan en la economía capitalista clásica, adquiere un carácter mucho más radical.⁷

Los regímenes políticos que se instalan a partir del proceso de industrialización y cuyo objetivo es el desarrollo de éste, se mantienen gracias a una amplia base social. Esta última se compone de nuevas capas de funcionarios favorecidos por la extensión del papel del Estado y el aumento de la oferta de empleos en el sector terciario, de los profesionales liberales y de los pequeños propietarios favorecidos por el aumento de la renta urbana. Aun dentro de las clases explotadas, nuevos contingentes de trabajadores incorporados a la fuerza de trabajo industrial, que gozan de privilegios que antes no poseían en calidad de trabajadores rurales o subproletarios, constituirán la base de las relaciones de tipo populista. La dinámica misma de esa industrialización extensiva, que había dado las condiciones para la existencia de los Estados de compromiso, irá más allá de esas condiciones. Tras haber empezado por las ramas de producción de los bienes de consumo inmediato, ésta alcanza las ramas más complejas de los bienes intermediarios y de capital, como consecuencia de las presiones ejercidas en la capacidad de importación del sistema, lo cual produce un cambio del eje de acumulación para esos sectores.

Durante los años 50, las exigencias de esa transformación se vuelven evidentes en México, en Brasil y en Argentina. Las burguesías gobernantes procurarán dar una respuesta acorde a la lógica del proceso de acumulación con mayor o menor éxito según cada caso.

Durante el proceso de sustitución de las importaciones, hay un momento en que el importe de las inversiones necesarias para el paso a una nueva etapa debe resolver el problema de la falta de capitales internos y de la disponibilidad de los capitales internacionales. La solicitud de capitales extranjeros tendrá que acompañarse de algunos atractivos precisos. Los más importantes son una legislación favorable a la repatriación de los beneficios, la disponibilidad de los recursos de infraestructura a un costo muy bajo y, sobre todo, una fuerza de trabajo barata. En la medida en que, en la posguerra, el mercado mundial vuelve a ser más amplio, la dependencia de los procesos de industrialización periférica se fortalece, lo cual se expresa por los modelos tecnológicos que la determinan y que acelerarán el proceso de monopolización de la economía.

La introducción de una tecnología demasiado desarrollada para los modelos latinoamericanos produce un aumento de la productividad más que proporcional al desarrollo

⁷ Véase Ruy Mauro Marini, *Dialéctica de la dependencia*, op. cit., pp. 63 y 64.

de la base productiva. Es decir que el importe de las nuevas inversiones no compensa el desempleo producido por la innovación tecnológica. Por tanto, tenemos aquí el esbozo de una crisis de realización.

Por un lado,

la bipolarización de los ingresos [...] tiende a frenar la reproducción ampliada del capital y *exacerba las contradicciones*, por otro tiende a subproducir, mediante la nueva orientación de la acumulación del capital, una nueva modificación del reparto de los ingresos en beneficio de una tercera categoría —llamada comúnmente clases medias— en perjuicio de la clase obrera. Esta tercera demanda reactiva el proceso de acumulación cuando puede manifestarse, o sea, cuando la represión/integración de la clase obrera se lleva a cabo sin demasiados tropiezos.⁸

Esta tercera demanda no es una creación artificial *a posteriori* sino un producto directo del modo de acumulación mencionado. Por una parte, las características técnicas de las industrias modernas exigen un aumento del número de trabajadores improductivos. Estos, en las condiciones de formación de mano de obra vigente en esos países, alcanzan niveles de remuneración mucho más elevados que los trabajadores manuales. Por otra parte, las dificultades en la realización del capital provocan una malversación de los capitales de la esfera productiva hacia el comercio y los servicios. Los empleos aumentan en esa esfera, produciendo otros tantos consumidores privilegiados.

En esas condiciones, el incremento del mercado no implicará necesariamente el aumento de la remuneración de la fuerza de trabajo. Por el contrario, implicará la sobreexplotación de esa fuerza para garantizar una "sobreacumulación" capaz de sostener la intensificación del consumo de una base reducida y privilegiada. Esa necesidad de ejercer presión para disminuir los costos de la producción y de compensar los límites del mercado por un alza de los precios de los productos, ya no será compatible con los regímenes populistas y de democracia burguesa.

Con esto no queremos decir que los regímenes autoritarios se hayan establecido forzosamente por doquier en América Latina junto con su industrialización. La burguesía no escoge a su antojo sus regímenes de dominación; éstos resultarán de la relación de las fuerzas sociales en presencia en cada situación.

⁸ P. Salama, "Vera un nouveau modele d'accumulation", en *Critiques de l'Economie Politique*, París, abril-septiembre de 1974, pp. 58.59.

En cambio, afirmamos que las condiciones políticas más propicias para el desarrollo de la industrialización capitalista en la periferia, en la fase actual de la acumulación capitalista (y aquí hablamos de fase en un sentido *internacional*, ya que, independientemente del nivel de desarrollo alcanzado en cada país por su industria, las condiciones internacionales de acumulación no permiten la repetición de los procesos de sustitución de importaciones para mercados nacionales relativamente cerrados, como en los años 30) , garantizan la represión de las formas elementales de resistencia de las clases trabajadoras. Por esa razón, los regímenes que se apoyan en una movilización de masas de tipo populista en el marco de una democracia formal, constituyen cada vez más los momentos inestables de un equilibrio precario de fuerzas y no la "forma normal" de la dominación burguesa en el continente.

LAS FORMAS DE MILITARIZACIÓN DEL ESTADO

Las dictaduras militares comparten el hecho de eliminar a los diferentes organismos que permiten el equilibrio de representación de las distintas fracciones de las clases dominantes. En su lugar, surge un Ejecutivo que concentra todas las funciones de gobierno y que se apoya directamente en las fuerzas armadas.

Las características propias de las fuerzas armadas —"profesionalismo", disciplina autoritaria, jerarquía rígida, ideología de defensa del orden— atribuirán naturalmente a los regímenes militares un aspecto más obviamente represivo. Este recurso más directo a la represión ya es un síntoma de la crisis de legitimidad de la dominación burguesa en el continente. Pero si observamos más detenidamente, podemos distinguir los regímenes militares centrados en la función represiva (Brasil, Chile, Bolivia, Nicaragua, etcétera) y los que combinan características semipopulistas con los rasgos específicamente represivos (Perú, Panamá, etcétera). Dentro de los regímenes militares orientados hacia la represión, deberemos distinguir siempre entre las dictaduras militares tradicionales, erigidas para mantener la sociedad primaria exportadora, y las dictaduras militares que surgen para responder a las contradicciones creadas por la sociedad industrial capitalista. Veremos que tendrán un carácter diferente según las diferentes funciones que ejerzan.

Las dictaduras militares tradicionales

Al ser productos de una sociedad relativamente simple, su función también es relativamente simple: asegurar la realización de la sobreexplotación de los trabajadores rurales, impedir que el orden establecido se vea amenazado por la competencia y las luchas entre los sectores oligárquicos rivales. En cierta forma, estos regímenes constituyen mediaciones entre la oligarquía rural del país y las (o la) compañías extranjeras que controlan su comercio exterior. Estas reciben el apoyo de las oligarquías locales para representar sus intereses frente al capital extranjero y para garantizar el orden interno. Gracias a este sostén, las tiranías militares tradicionales impondrán el orden por encima de las interminables luchas de los grupos. Pero los tiranos pertenecen a su vez a clases y utilizarán el poder en su provecho.

En este sentido, esas dictaduras no logran unificar a la clase dominante. El estigma de la corrupción que se les adhiere como su propia sombra implica tan sólo la ausencia del robo legal, institucionalizado. Por esta razón, son al mismo tiempo instrumento de la empresa extranjera, en su tarea de control de la economía nacional, y de la clase dominante local respecto de ésta. Tal es la descripción de las dictaduras de Trujillo en Santo Domingo y de Somoza en Nicaragua, según Halperin Donghi:

En esos países, alcanzados tardíamente por la expansión de las exportaciones, la dictadura es el instrumento de conquista económica del grupo dirigente: la familia Trujillo en Santo Domingo y los Somoza en Nicaragua se apoderan de gran parte del patrimonio nacional. Esos progresos mediatizan a las oligarquías tradicionales e introducen a los representantes de la economía dominante: la conquista de la tierra dominicana por las compañías azucareras norteamericanas, de Nicaragua por la, United Fruit. En ambos casos, la dictadura es un legado de la ocupación militar norteamericana; *los jefes de las Guardias Nacionales, excepcionalmente bien armadas y mantenidas, deben su cargo al ocupante y cuentan con un apoyo militar independiente de las masas tradicionales del poder local; las Guardias Nacionales son leales al dictador y menos permeables que el ejército a las influencias de la oligarquía.*⁹

Miremos de más cerca. ¿Cuáles son los problemas que procuran resolver esas dictaduras, en cuáles relaciones sociales se basan y cuáles son las contradicciones engendradas por esos regímenes?

⁹ Halperin Donghi, op. cit., p. 238.

A principios de siglo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia compartían la dominación económica de Nicaragua. El gobierno nacionalista de Zelaya trata de utilizar esa competencia para mejorar las condiciones de la economía local. La United Fruit organiza un movimiento armado que derriba al gobierno. La intervención directa de Estados Unidos en 1911 asegura la "elección" de un nuevo presidente, miembro del Partido Conservador. Pero cuando las fuerzas de Estados Unidos se retiran de Nicaragua en 1924, estalla una guerra civil. En 1926, los yanquis, desembarcan de nuevo y logran que los generales liberales y conservadores hagan la paz. Pero entre los liberales que se oponían al gobierno fantoche ya se encontraban fuerzas que expresaban las aspiraciones de los trabajadores. Para éstos, el problema de fondo era la situación de explotación a que los sometía la fuerza extranjera. Sandino, ex-trabajador agrícola, ex-minero, encabeza un pequeño ejército que lucha contra la Guardia Nacional y las fuerzas de ocupación hasta 1930. Tras la derrota de estas tropas, el general Anastasio Somoza, comandante de la Guardia Nacional, dirige un golpe de Estado y su largo reinado comienza.

La dictadura de Somoza se impone gracias al poder de la Guardia Nacional que suprime la amenaza sandinista y asegura un Estado nacional liberado de un ejército de ocupación pero que garantiza la dominación económica de la empresa norteamericana, sin oposición.

El poder personal o de un clan (Trujillo, Duvalier, Somoza, Stroessner) mantenido por una guardia fiel y privilegiada, corresponde a las necesidades de una sociedad simple del tipo de las que se basan en la exportación de productos primarios. Con miras a proporcionar un máximo de beneficio para esas empresas, el terror del Estado debe aplastar la más mínima manifestación de oposición. La población local, cuyas reivindicaciones tendrán como único resultado aumentar los costos de producción y disminuir los beneficios de la empresa, no consume las riquezas producidas por los sectores importantes de la economía.

Así, esos regímenes emplean la fuerza, la miseria extrema y la ignorancia para reprimir a la población. Las energías revolucionarias que se desarrollan en semejante medio pueden ilustrarlas la Revolución Mexicana de 1910-1915, la insurrección campesina de El Salvador en 1932, la larga lucha de Sandino y la revolución cubana.

Otro factor disminuye su estabilidad. Esos regímenes que se apoyan en el terror policíaco y que protegen la corrupción del clan dominante, no brindan a las clases medias urbanas más que la posibilidad de aceptar las migajas del poder autocrático. En la medida en que esas clases aumentan y se refuerzan socialmente, fortalecen al mismo tiempo los movimientos de tipo democrático y moralizador. Esas acciones de la pequeña burguesía encontraron un apoyo entre algunas fracciones de la oligarquía y tuvieron como únicas consecuencias repetir los ciclos de golpes de Estado militar en América Latina. En realidad, desde este punto de vista,

la revolución cubana representa un viraje. Al principio Estados Unidos toleró a Fidel porque tan sólo parecía ser un nuevo rebelde liberal contra una tiranía corrupta, que en unos cuantos años iba a dejar paso a otra tiranía corrupta. Al vincular sus objetivos democráticos con las aspiraciones sociales más profundas de las masas trabajadoras, la revolución cubana señaló una nueva dinámica e imposibilitó las maniobras liberales de las antiguas oligarquías.

Bánzer, en Bolivia, es un caso más reciente. El ciclo restaurador de las fuerzas armadas bolivianas después de la revolución de 1952 acabó en 1964 por el golpe de Estado de Barrientos. El carácter antiobrero de los regímenes de Barrientos y de Bánzer es muy significativo si se considera la fuerza política misma del proletariado boliviano. Desde este enfoque, éstos se asemejan más a las nuevas dictaduras militares que a las dictaduras tradicionales. Pero así como las luchas revolucionarias del proletariado boliviano tuvieron que arrostrar el peso del sector rural y el atraso del país, la falta de base social correspondiente no permite que la dictadura militar siga el ejemplo del modelo brasileño. En Bolivia, la dictadura militar no será el instrumento del sector monopolista de la industria sino tan sólo el instrumento mediador entre los sectores de la burguesía nacional y el imperialismo, mediante el control estatal de los minerales. Vista así, la situación se parece más a las dictaduras militares tradicionales, cuya particularidad es la nacionalización del sector de las minas, legado de la revolución de 1952. Pero las principales herencias de 1952 son la experiencia y la madurez del proletariado, que impiden toda estabilización reaccionaria del país.

Las nuevas dictaduras militares

Comparten con las precedentes la función de enfrentar la capacidad de reacción de los trabajadores a la sobreexplotación. Además, tienen tareas específicas en la medida en que corresponden a otra etapa del desarrollo capitalista. Al analizar las condiciones particulares que originan tales regímenes, Emir Sader señala la existencia

de una crisis de hegemonía dentro del sistema político que conduce invariablemente de las coaliciones de tipo reformista —reformismo pequeñoburgués, reformismo obrero— al gobierno, tratando de reordenar el sistema de dominación mediante la atenuación de las luchas de clases y la colocación de dirigentes de masa conciliadores.

Esos gobiernos constituirán

la última solución posible dentro del sistema vigente a finales de los años 30 y a principios de los 40: régimen de gobierno democrático parlamentario, ideología populista y funcionamiento autoritario y elitista. En la medida en que esas soluciones intermedias no logran instalarse en forma duradera, el sistema político está condenado a un fracaso definitivo.¹⁰

El carácter antiobrero de este tipo de dictadura destaca más que en las dictaduras militares tradicionales, ya que se enfrenta a movimientos obreros mucho más desarrollados, que maduraron durante periodos de relativa libertad. Como sobrevienen en fases más adelantadas de la concentración capitalista, su función de ordenar los conflictos interiores de las clases dominantes se llevará a cabo en un sentido de aceleración del proceso de monopolización del capital. Por lo tanto, es lógico que los gobiernos que reflejan los intereses del, capital monopolista sean los que sustituyan a las representaciones políticas excluidas que expresan los diversos grados de conciliación de clases. Ahora bien, la expresión política de tales intereses implica una acción global mucho más compleja que la dirección política de los antiguos sectores primarios exportadores. En el lugar ocupado antaño por el antiguo tirano y su clan, la nueva dictadura militar erige la institución de las fuerzas armadas en órgano dirigente. El éxito de la dictadura se mide según su capacidad para convertir a las fuerzas armadas no sólo en el órgano central del poder sino además en el partido único que expresa los intereses de la fracción hegemónica del capital.

Las fuerzas armadas son el último elemento afectado por el sistema de dominación y se apoyan en su estructura jerárquica, lo cual no las ampara de las luchas de clase, pero disminuye su permeabilidad a los efectos de la violenta lucha social y política llevada a cabo en el conjunto de la sociedad, Por estas razones, en calidad de institución, representan el último punto de apoyo para la reconstitución de las condiciones de la dominación política y de la explotación económica.¹¹

El ejemplo más acabado de esos regímenes es la dictadura militar brasileña. Las condiciones de la acumulación capitalista a partir de mediados de los años 50 la prepararon. El proceso de industrialización se había desarrollado gracias a una entrada masiva de capitales extranjeros que dieron un gran dinamismo a las industrias básicas y de bienes de consumo

¹⁰ Emir Sader, *O Estado militar en América Latina*.

¹¹ Emir Sader, op. cit.

duradero, para un sector consumidor urbano limitado y de altos ingresos. Al iniciarse los años 60, el mantenimiento de ese proceso exigía nuevas inversiones en esos sectores dinámicos. Pero la capacidad de atraer capitales extranjeros depende de la capacidad del sistema para contener las reivindicaciones obreras, garantizar tasas elevadas de explotación y racionalizar la economía, eliminando las unidades productivas menos rentables, al mismo tiempo que se opera una nueva concentración del ingreso en provecho de los sectores dinámicos.

El régimen político que había dirigido la etapa anterior del proceso de industrialización había dado muestras de absoluta incapacidad para satisfacer las nuevas necesidades. El peso político otorgado a todas las fracciones burguesas en el modelo democrático representativo impedía la consecución de una política coherente y racional de concentración capitalista. Las relaciones de tipo populista con las masas también impedían la aplicación de una política de fijación de salarios máximos.

Frente a las nuevas necesidades de la acumulación capitalista, la burguesía abandona el populismo cuando el movimiento popular comienza a desbordar a los dirigentes populistas. Pero sus organizaciones políticas se hallan impregnadas de ese mismo populismo (PSD, PTB) o, si no, son capaces de superarlo en el marco de la democracia parlamentaria (UDN). Así, las fuerzas armadas se presentan como el "brazo armado" de una amplia coalición. La política de saneamiento de la izquierda y de la corriente populista para evitar las concesiones a las masas elimina progresivamente de la escena política a todos los dirigentes burgueses y vacía las instituciones civiles de todo poder. En el proceso de combate contra la "subversión", de "racionalización" del aparato político y económico del Estado, las fuerzas armadas surgirán como la espina dorsal del Estado, reduciendo progresivamente a un papel puramente decorativo los poderes legislativos y judicial y los partidos, controlando la fuerza de presión de la prensa, de las universidades y de la Iglesia.

Sin el contrapeso de las representaciones políticas, la dictadura militar aplica la política del capital monopolista para vencer la crisis económica que se abatió sobre el país desde 1962. Utiliza una política de fijación de salarios máximos, de represión de la vida sindical, de restricción de los créditos, de facilidades para el capital extranjero, de aumento de la tasa de explotación y de comprensión del mercado de consumo de "bienes salarios"; acelera la concentración monopolista y la desnacionalización de la economía.

La dictadura militar no se consumará hasta diciembre de 1968, por la liquidación de los vestigios de la república burguesa. Durante ese año, las contradicciones acumuladas tanto por la crisis económica y por las soluciones que se le dieron, como por la represión política, van a llegar a su límite. Ante la extrema impopularidad del gobierno militar, las antiguas

instituciones burguesas manifiestan algunas intenciones de "hacer que los militares vuelvan a los cuarteles". Pero esta oposición burguesa, ante los primeros síntomas de radicalización de una oposición popular, retrocede y se eclipsa. La izquierda seguía siendo igual de inmadura y frágil. La dictadura militar vuelve pues a tomar la iniciativa, asestando un nuevo golpe, cuya consecuencia es el desmantelamiento de toda la vida sindical y política. El Acta Institucional número 5, más que una nueva victoria de las fuerzas armadas, va a expresar un viraje decisivo en el régimen. So pretexto de la necesidad de "luchar contra la guerra revolucionaria", la dictadura militar suprime los partidos oficiales y el Parlamento, retira toda la autonomía que aún le quedaba al aparato judicial, retira sus derechos políticos a los líderes burgueses que representaban una alternativa política y coloca bajo su control directo a los principales aparatos ideológicos, desde la universidad hasta la prensa. El aparato represivo policiaco-militar adquiere una autonomía significativa dentro de las fuerzas armadas, dada la forma misma mediante la cual se consolida el régimen. Esto impedirá la creación de canales de expresión institucionales para los diversos sectores de la clase dominante, y la legitimidad ideológica dependerá del éxito económico. Para esto, la dictadura ya contaba con los efectos de la recuperación económica que se dejaba sentir desde 1967. El crecimiento continuo de la producción nacional, realizado merced a la explotación exacerbada de las masas trabajadoras, ofrece perspectivas extraordinarias de rentabilidad para los grandes inversionistas y acarrea una elevación significativa de los ingresos de los estratos privilegiados de las clases medias urbanas. Esto imposibilita todo intento de oposición burguesa en ese periodo.

La forma en que la dictadura militar asegura la recuperación capitalista protege la "vía monopolista" del desarrollo capitalista. La sobreexplotación de los trabajadores propicia la acumulación, pero sin desarrollar el mercado interno de "bienes salarios", ámbito que carece de interés para el capital monopolista en Brasil. La aceleración de la transformación capitalista en la agricultura también se lleva a cabo mediante un proceso acrecentado de proletarización del campesinado y contribuye a disminuir los costos de la producción industrial. La sollicitación de capitales extranjeros y la política de créditos van a intensificar la dominación imperialista sobre la economía. La constitución de un sistema para financiar el consumo de los bienes duraderos amplifica las condiciones de realización de los sectores privilegiados por el capital imperialista.

La dictadura militar brasileña presentaba al principio una apariencia bonapartista en que las fuerzas armadas servían al gran capital sin satisfacer las reivindicaciones inmediatas de sus agentes. El peso creciente del aparato económico del Estado mostró una tendencia a fortalecer el poder de la burocracia gubernamental con respecto a los capitalistas privados. Pero en el

proceso mismo de aplicación de la política favorable al gran capital, éste último absorbe al cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas. Los generales y sus tecnócratas ya no son los defensores del *sistema* capitalista, al mismo tiempo que son autónomos ante la *clase* capitalista. Hoy día, pertenecen a esa clase. Se integraron en las direcciones de las grandes empresas. Ese cuerpo de oficiales que dirige los centros de poder político ya es el representante privilegiado del gran capital. En este sentido, se puede hablar de un "partido militar" como expresión principal de los intereses capitalistas.

La misma crisis de hegemonía produce la dictadura de Barrientos en Bolivia (1964), de Onganía en Argentina (1966), de Bánzer en Bolivia (1971), de Pinochet en Chile (1973). La incapacidad de la burguesía para componer una fuerza social que pueda vencer a la izquierda en el marco de la democracia representativa y la incapacidad de la izquierda para derrotar a la reacción burguesa dan lugar a la solución militar. El nivel de violencia del golpe de Estado del 11 de septiembre en Chile puede explicarse por la calidad de los enemigos que tuvo que abatir. La solidez y la flexibilidad de la democracia parlamentaria chilena habían servido para institucionalizar la redistribución efectuada por el Estado de los excedentes dejados por el monopolio extranjero en las minas. El sistema político funcionaba para regularizar las relaciones entre los grupos dominantes y entre esos grupos y el enclave extranjero, para ganarse el apoyo de los "sectores medios", integrados de varias maneras en los aparatos burocráticos, y para encauzar el movimiento obrero en la legalidad vigente, mediante el reconocimiento de los derechos sindicales y políticos elementales para esos sectores más organizados. Cuando ese sistema ya no permite contener la dinámica autónoma del proletariado y la burguesía experimenta la necesidad de eliminarlo, se topa con las tradiciones legales del país y con la madurez política de dicho proletariado. Esos dos factores habían impedido también el golpe de Estado al llegar Allende al poder en 1970.

La ascensión paulatina del movimiento obrero y popular chileno se dejaba sentir desde finales de los años 50. En 1958, a Allende le faltaron aproximadamente 30 000 votos para ganar las elecciones. El continuo avance de la coalición de izquierdas incitaba a la burguesía a abandonar a su candidato conservador en 1964 y a unirse en torno a la "revolución en la libertad" de Eduardo Frei, réplica kennedista a la revolución cubana. Después de tres años de un éxito aparente, el régimen se muestra incapaz de mantener las tímidas reformas promovidas por la DC. La base social campesina, ganada por el comienzo de la reforma agraria, no compensaba ni la ruptura del bloque burgués provocada por la reacción de la oligarquía rural, ni el ascenso de las energías revolucionarias del campesinado, que desbordaban las posibilidades del régimen. La base social urbana conquistada por la política

populista de viviendas y de equipos colectivos tampoco compensó los desbordamientos incitados por la izquierda revolucionaria.

En 1970, la izquierda en su ascenso se enfrenta a la burguesía dividida. El proyecto UP de reconversión de la economía en función del consumo popular y de la democratización del Estado reemplaza al proyecto de la DC de organizar el mercado interior y la integración de las bases populares al Estado burgués, Semejante proyecto lleva a su extremo límite las contradicciones que desgarraban a la organización chilena.

La existencia de un gobierno constituido fundamentalmente por los partidos tradicionales del proletariado chileno en tal coyuntura de crisis económica y de ascenso de las masas debía, a su vez, iniciar un periodo prerrevolucionario. La burguesía, que no disponía del poder gubernamental y que temía la orientación que podía tomar el proceso, no podía enfrentar de modo consecuente la crisis económica. Por tanto, la burguesía, al reaccionar frenando las inversiones y estimulando la especulación, agravó la crisis capitalista.¹²

El movimiento de las masas, impulsadas por la crisis y estimuladas por la existencia del gobierno popular, se extiende y se radicaliza. En la medida en que las vías institucionales — privilegiadas por la política de "democratización del Estado"— muestran sus límites, se observan los primeros embriones de un doble poder. Por tanto, la política del MIR basada en el desarrollo de esos embriones deja de ser una simple proclamación al conjugarse con la dinámica de las fracciones numéricamente más importantes de la clase obrera y de sectores de la propia UP.

Pero la UP, coherente con su propia estrategia, busca su estabilidad acudiendo a una intervención acrecentada de las fuerzas armadas.

Dentro de la burguesía, la DC y la derecha en general también deben acabar por buscar una solución militar. Es evidente que el objetivo de la DC no era una dictadura militar que la hubiera privado de las perspectivas de dirección política. Su estrategia era la "desestabilización" del gobierno: forzar a fondo todas las reivindicaciones y exacerbar todos los descontentos y, simultáneamente, mantener a la UP prisionera del "Estado de derecho", lo cual le impedía resolver a su favor las contradicciones creadas. Pero no se puede seguir indefinidamente una política tan arriesgada. Las fuerzas sociales que se desencadenan tienen una dinámica propia que sobrepasa a los aprendices de brujo. Y aunque la movilización de la derecha logró desestabilizar al gobierno, no logró en cambio derrotarlo. Por el contrario: a cada ofensiva reaccionaria, la contraofensiva popular incitaba al gobierno a asestar nuevos

¹² Véanse los artículos de Ruy Mauro Marini y C. Sepúlveda, "La politique de la voie chilienne" y de Eder Sader, "La transition manquée" en *Critiques de l'Économie Politique*. París, 1974, n. 16 y 17.

golpes contra el régimen burgués. La "desestabilización" institucional daba el paso a una nueva institucionalización del "poder popular".

La burguesía, tras percatarse de esa situación, desplazó el campo de batalla al seno del Estado burgués y particularmente a las fuerzas armadas. La preservación casi íntegra de las fuerzas armadas tradicionales, con su ideología del orden y su disciplina ciega, les permitió desempeñar el papel de agente privilegiado de la "restauración". Con esto, las fuerzas armadas van más allá de la liquidación de Allende y de la resistencia popular para luego restablecer el orden democrático, como lo deseaban los demócratas cristianos. El proceso acaecido en Brasil, entre 1964 y 1968, cuando la dictadura militar coexiste con los vestigios del "poder civil", no ocurrió en Chile. El Parlamento ni siquiera conservó su fachada y los partidos políticos burgueses desaparecieron. La universidad es víctima de la intervención militar y los medios de comunicación de masa se colocan en seguida bajo control militar directo. El aparato judicial cae bajo la dirección de las fuerzas armadas. Éstas empiezan a ejercer el gobierno en calidad de institución, conservando su propia jerarquía, tras el sangriento "saneamiento" de septiembre.

El Estado se reduce prácticamente a las fuerzas armadas, que acumulan las funciones ejecutiva, legislativa y judicial y que procuran convertirse en el verdadero partido único de la clase dominante. Para alcanzar este último objetivo, insisten en los perjuicios causados por el sistema de partidos, al cual se le atribuye la división del país y la amenaza de la revolución social; en vez de todo eso, la dictadura propone su ideología de unidad nacional, mediante la despolitización del país y su sumisión a la dirección militar.

Ésta muestra su eficacia represiva por el monopolio de la fuerza, por la centralización nacional, por su disciplina monolítica. Su posibilidad de imponerse como la representación adecuada de la burguesía depende de su éxito en la supresión de la resistencia y en el restablecimiento de la economía.

La destrucción de todo el aparato legal no significa que la dictadura militar haya logrado de una sola vez dirigir toda la vida nacional. Aun si no se toma en cuenta que la izquierda y el movimiento obrero se reorganizaron en la clandestinidad, la burguesía no liquidó definitivamente todos sus antiguos medios. Aunque es verdad que hoy día no existen partidos burgueses, en la verdadera acepción del término, existen en cambio grupos de presión que actúan dentro y fuera de las fuerzas armadas. La propia DC se transformó (¿temporalmente?) en un grupo de presión, que utiliza su base social potencial para ejercer cierta influencia en diversos sectores de las fuerzas armadas. Junto con ella, otros organismos llevan a cabo la misma función: la Iglesia, los grandes diarios, el colegio de abogados, etcétera. Las fuerzas

armadas, por su parte, al procurar superar la división política existente en el seno de la sociedad, la hacen penetrar en su propio seno. La supervivencia de la dictadura militar está sujeta a su capacidad para volver a ordenar la acumulación, capitalista en el país. En ese periodo, además de los sacrificios de las masas trabajadoras expresados por el desempleo masivo y por salarios que provocan la malnutrición y la miseria, se perjudicaron los sectores del capital pequeño y medio, como lo demuestra su desaparición de la vida económica. El régimen tiene que mostrar a la oposición latente en esos sectores su capacidad para conjurar la revolución y al mismo tiempo asegura tasas elevadas de explotación de la fuerza de trabajo. El argumento tiene su peso, pero apenas si afecta a los que ven que la salvación del capitalismo pasa antes que su propia supervivencia como capitalistas. La presión ejercida sobre los capitalistas en general es mucho más fuerte de lo que fue en Brasil, a causa de: o bien la gravedad de la crisis chilena, o bien las particularidades de la política económica de la junta chilena que, al estar orientada hacia el liberalismo económico, abre el país a la dominación de las grandes compañías sin contrarrestarla por la acción del Estado. Aunque sea cierto, desde el punto de vista político, que los capitalistas chilenos tienen una tradición política mucho más importante que la de sus homólogos brasileños, la amenaza del proletariado los detiene sin embargo mucho más. Por lo tanto, la oposición burguesa no arriesga una oposición abierta y utiliza su descontento para influir en ciertos sectores de las fuerzas armadas con objeto de que hagan más flexible el régimen.

Pero ¿cómo volver más flexible un régimen cuya estabilidad proviene precisamente de la omnipotencia de sus centros de mando? Si el régimen militar chileno es el más duro entre las nuevas dictaduras militares, esto se debe a que la sociedad chilena fue la más contaminada por las tendencias de "desagregación" de las clases explotadas. Su eficacia represiva se obtiene en perjuicio de su legitimidad. Si logra brindar nuevas perspectivas para el desarrollo capitalista, recuperará su legitimidad ante los sectores que sacarán provecho de ese desarrollo. Pero si, antes de lograrlo, las contradicciones creadas por ese régimen desatan una crisis en el sistema de dominación, debido a su rigidez, todo el Estado se verá afectado.

Las coaliciones militares populistas

Existen manifestaciones particulares del proceso de militarización del Estado, en que gobiernos civiles de tendencia populista cuyo origen son sistemas democráticos representativos, se hallan bajo el control directo de las fuerzas armadas. Se trata de situaciones en que faltan aún las condiciones de un golpe de Estado militar, pero en las que el

desarrollo de las luchas de clase ya exige una creciente intervención de las fuerzas armadas. Esas últimas ya no representan "la última reserva del orden" que se mantiene fuera del juego político para sólo intervenir "en última instancia", pero aún no son los ejecutantes directos de la política. Su continua intervención y su control directo sobre las acciones políticas evidencian el agravamiento de la crisis y la imposibilidad inmediata de resolverla.

En este caso no se trata de gobiernos militares con proyectos populistas, como en Perú, ni siquiera de gobiernos militares con fachada civil, como era el caso de Bordaberry, en Uruguay.

En esos dos casos, un golpe militar ya destruyó la institucionalización democrática representativa y estableció un nuevo equilibrio político. En el caso de una coalición militar populista, la inestabilidad política se debe a que la democracia representativa ya no es capaz de garantizar la estabilidad de la dominación burguesa sin que existan por ello los factores necesarios para el establecimiento de una dictadura militar.

Semejante situación es forzosamente transitoria; si se prolonga, como en Argentina, se agravan todas las contradicciones del sistema. Este tipo de coalición no acumula la eficacia de la represión militar y la eficacia de la movilización populista: por el contrario, éstas tienden a anularse y estimulan el desarrollo de las luchas sociales.

En Argentina, la primera solución militar (1966-1973) no tuvo éxito, pero el gobierno peronista tampoco logró obtener la estabilización política del país.

La dictadura militar se impone con el golpe de Estado de Onganía, en 1966. Después de 1955, fecha de la derrota del movimiento obrero que se hallaba bajo la dirección de la burguesía populista (Perón), el gobierno Frondizi probó que era imposible gobernar en contra de ese movimiento obrero (aun si se reprimía enérgicamente el peronismo y la izquierda) en condiciones democráticas representativas. El golpe militar de 1962 derroca a este último gobierno, inaugurando un periodo de gobierno civil bajo el control directo de las fuerzas armadas, encargadas de las purgas políticas necesarias.

El fracaso de esas fórmulas híbridas cuyas tareas civiles las asumían los representantes de las diversas tendencias radicales, revela la imposibilidad de un gobierno representativo contra el peronismo. Las clases medias, base social por excelencia del radicalismo, se sentían atraídas por la oposición peronista.

La dictadura de Onganía procura simultáneamente liquidar la democracia parlamentaria y dividir el movimiento obrero. A partir de la posición de fuerza que le confiere el golpe de Estado, Onganía trata de negociar con la burocracia sindical peronista.

La irrupción seminsurreccional del movimiento obrero en 1969, expresión de una dinámica proletaria autónoma con respecto a la burocracia sindical ortodoxa, destruye las bases de la "estabilidad" planeada por Onganía. En 1970, un nuevo golpe de Estado destituyó a Onganía y llevó a la presidencia a Levingstone, quien será destituido un poco más tarde por Lanusse.

Ninguna de las vicisitudes de la dictadura militar logra quebrantar la capacidad de lucha de la clase obrera. Frente a la combatividad de sus fracciones revolucionarias, el gobierno no tenía más remedio que dividir a la clase obrera mediante concesiones a los dirigentes sindicales corruptos. Así, la dictadura argentina nunca pudo proporcionar al capital imperialista una fuerza de trabajo tan barata y "disciplinada" como la brasileña. Por ende perdió la posibilidad de sentar las bases de una expansión capitalista del mismo tipo.

Las fuerzas armadas, al reconocer su derrota, deciden —mediante una maniobra de Lanusse— efectuar una retirada organizada. El llamamiento de Lanusse a elecciones se presenta como una estrategia de "retirada organizada" del "partido militar" para tratar: a) de evitar la derrota abierta ante el ascenso del movimiento revolucionario; y b) de mantener sus posiciones para poder conservar su papel de control sobre el gobierno civil.

El éxito de esta fórmula iba a depender de las tendencias dominantes en el peronismo, que unificaban al movimiento de masas en pleno desarrollo. El cálculo resultó ser correcto: la confianza de las masas en Perón desempeñó un papel compensador con respecto a las fuerzas liberadas por "la apertura política". En el periodo crítico inicial, esta confianza sirvió para aislar a las tendencias revolucionarias. Cuando el proyecto burgués del peronismo arrojó al ala izquierda de ese movimiento hacia la oposición, las fuerzas armadas ya estaban relativamente reorganizadas. El peronismo desempeñó su papel y, precisamente porque lo desempeñó bien, se dividió y mostró una tendencia al desgaste. En esa etapa, apoyándose ya en el aparato militar que había quedado intacto, el "partido militar" se reveló como el verdadero partido burgués. En esas condiciones, controló el avance del peronismo, a quien incumbían la división y la disciplina de la clase obrera. Puesto que esta última ya poseía una dinámica autónoma de clase, el gobierno peronista dejaba de ser eficaz para la burguesía y ya no representaba nada para el proletariado. El golpe militar de marzo de 1976 fue la consecuencia lógica de ese callejón sin salida.

En Colombia, por el contrario, no hay una verdadera coalición populista militar. Un presidente electo por el Partido Liberal ejerce el gobierno, pero los límites de la acción gubernamental los imponen las fuerzas armadas, que intervienen cada día más en la escena política.

La hegemonía política de las fuerzas armadas en ese país todavía no es suficiente para permitirles presentarse como una *fuerza de recambio*. Siguen siendo una *reserva estratégica*. El equilibrio político durante los dieciséis años (1958-1974) "de unidad nacional" que duró el Frente Nacional (convenio entre los dos grandes partidos burgueses para alternar en la presidencia y repartirse los demás cargos claves en la administración) permitió evitar los golpes militares y reducir al ejército a su papel "natural". Ya terminado el periodo del "Frente Nacional", la tentativa de las fracciones más modernas de la burguesía de modificar a su favor la estructura paralizada del país tan sólo puede acarrear crisis. Tras cada una de ellas, se puede escuchar el ruido sordo de la bota militar. Las luchas de las masas, de nuevo abiertamente reprimidas, superaron enseguida la política populista del gobierno liberal. Por otra parte, los conservadores, que no tienen ninguna esperanza de recuperar el gobierno por la vía electoral, golpean ya a la puerta de los cuarteles. Los signos de la ineficacia del gobierno civil sustentan ya la pretensión de los militares al Ejecutivo.

EL SEMIPOPULISMO MILITAR

Un tipo de régimen militar particular y específico es el "semipopulismo militar", en el cual la primacía coercitiva no existe forzosamente o está mucho menos pronunciada que en las formas mencionadas hasta ahora. En este tipo de régimen, el ejército trata —y logra en cierta medida— de desempeñar el papel de aparato ideológico de masas de ciertos partidos populistas y ganarse un consenso mínimo mediante un conjunto de reformas sociales y medidas nacionalistas (o presentadas como tales). No se puede hablar de populismo en el sentido estricto en la medida en que no existe —o existe a un nivel muy reducido— una movilización popular en organizaciones de masas sindicales o políticas, tales como la CGT argentina, la Acción Democrática venezolana, etcétera. El intento de esos regímenes de adjudicarse instrumentos populares civiles, debidamente encuadrados y animados por militares, resulta por lo general un semifracaso, cuyo ejemplo clásico es el SINAMOS peruano.

Estos regímenes se caracterizan usualmente por el *bonapartismo*, o sea un grado relativamente elevado de autonomía con respecto a las clases dominantes, y una aparente posición de árbitro por encima de las fuerzas sociales antagónicas. En el bonapartismo militar, el ejército gobierna eliminando el personal político y las instituciones tradicionales (partidos, parlamento, magistrados, etcétera) de las clases dominantes, y lleva a cabo una política que

tiende a obtener cierto apoyo popular, y simultáneamente a salve orden social y económico establecido; todo está generalmente rematado por un personaje de tipo carismático (el "bonaparte") que ejerce funciones de árbitro en el propio seno del aparato militar.

En los años 1940-1950, América Latina conoció varios ejemplos de bonapartismo militar metamorfoseado en bonapartismo populista civil: es el caso de Perón, del MNR boliviano, etcétera. En el caso de los regímenes semipopulistas actuales en el continente, esta transición no ocurrió y el Estado conserva su carácter militarizado.

Los tres ejemplos pertenecientes a esta categoría que se pueden mencionar hoy día son los regímenes de Perú, de Panamá y de Ecuador. El caso peruano es con mucho el más importante, debido a la envergadura de las reformas acometidas y a su impacto político a escala del continente y más allá. Los regímenes de Panamá y de Ecuador parecen limitar su "semipopulismo" a algunas medidas diplomáticas o económicas en contra de ciertos intereses norteamericanos.

En su análisis del régimen peruano, el sociólogo Julio Cotler define los dos ejes del modelo populista militar como "la modernización del sistema capitalista y la neutralización de la movilización popular".¹³ Por una parte, la modernización significa la eliminación de las estructuras oligárquico-tradicionales y, por otra, la nueva formulación del sistema de dependencia; la neutralización implica la desmovilización de todo movimiento popular que supere el marco o los ritmos del proceso de modernización propuesto por el régimen militar.

Las causas del golpe de Estado de octubre de 1968, que derribó al gobierno "constitucional" del presidente Belaúnde Terry, se sitúan en diferentes niveles de la realidad social:

a] la incapacidad del sistema político tradicional para modernizar las relaciones sociales — sobre todo en el campo—y realizar las reformas necesarias para el mantenimiento del orden social; en particular, la impotencia del gobierno y del Parlamento para vencer la resistencia de la oligarquía hacendada y para decretar una reforma agraria que se volvió urgente, a raíz de los grandes movimientos de campesinos de los años 60 y la tendencia de las guerrillas a arraigarse en la población rural descontenta;

b] la crisis de hegemonía, debida al debilitamiento, las corrupciones y la desmoralización tanto del gobierno como de la oposición parlamentaria (el APRA), junto con escándalos

¹³ Julio Cotler, "El populismo militar como modelo de desarrollo nacional: el caso peruano", *International Political Science Association*. Political Science Round Table, Río de Janeiro, 1969 (documento mimeografiado, p. 11).

políticos sucesivos, siendo el último el acuerdo "cesionista" con la International Petroleum Company;¹⁴

c] el nacionalismo autoritario/modernista que constituye la ideología específica de los militares peruanos como categoría social, permite comprender su reacción a esta situación y el establecimiento de la Junta "semipopulista" presidida por el general Velazco Alvarado.

Esta ideología comienza a constituirse a partir de 1958 con la formación del CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), en el cual enseñarán, al lado de los militares tradicionales, economistas desarrollistas cercanos a la CEPAL. Así, se va a producir una combinación ideológica *sui generis* entre la problemática político-militar de la *counter-insurgency* y las preocupaciones socioeconómicas de tipo modernista y reformador. Por lo tanto, la conclusión práctica de esa enseñanza será la siguiente: el desarrollo económico y el progreso social son la mejor garantía contra la subversión. Como lo recalca en 1966 el sociólogo norteamericano L. North, "la nueva ideología militar preconiza la mejora de las condiciones sociales y económicas para que desaparezca cualquier descontento aprovechable por los grupos revolucionarios".¹⁵

El golpe de Estado de 1968 no es más que el último episodio de una serie de intervenciones políticas del ejército, que también constituyen los hitos de su evolución ideológica hacia una concepción "reformadora".

En 1962, el ejército toma el poder para impedir que el presidente electo, Víctor Raúl Haya de la Torre, asuma la presidencia. (Desde 1932, año del levantamiento del APRA en la ciudad de Trujillo, las fuerzas armadas consideran al partido de Haya de la Torre como "enemigo histórico".) Durante el corto lapso del régimen militar (1962-1963), éste se confrontará con el mayor movimiento campesino de masa de la historia reciente de Perú, en el Valle de la Convención; la intervención conjunta de las fuerzas policíacas y militares logrará finalmente aplastar y destruir los sindicatos y las milicias campesinas dirigidas por el marxista Hugo Blanco.

Tras la victoria electoral en 1963 de Belaúnde Terry, el candidato apoyado por el ejército, éste último se retira de la escena política para volver poco después, en 1965, a enfrentar un nuevo peligro para el orden establecido: las guerrillas rurales del MIR y del ELN.¹⁶ El estado mayor de las fuerzas armadas impone al presidente la suspensión de la Constitución y la

¹⁴ Véase a este respecto la obra del mayor Víctor Villanueva, *O golpe de 68 no Peru, do caudilhismo ao nacionalismo?* Ed. Civilizaçao Brasileira, Río de Janeiro, 1969.

¹⁵ L. North, *Civil-military Relations in Argentina, Chile and Peru*. Berkeley, 1966, p. 53.

¹⁶ MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), escisión marxista del APRA dirigida por Luis de la Puente Uceda; ELN (Ejército de Liberación Nacional), grupo comunista disidente dirigido por Héctor Bejar.

entrega de plenos poderes al ejército, bajo la dirección del general Velazco Alvarado y del general Maldonado (futuros dirigentes de la Junta de 1968). Esta operación de *counter-insurgency* logrará suprimir físicamente a los guerrilleros y a sus simpatizantes campesinos.

Esas dos experiencias van a contribuir mucho a fortalecer en los cuadros militares las conclusiones sacadas de los seminarios del Centro de Altos Estudios Militares: únicamente el desarrollo económico, las reformas sociales, la modernización de las relaciones de producción, pueden impedir las amenazas contra el orden establecido y el resurgimiento de los focos revolucionarios y garantizar la paz social y la "seguridad nacional". Según las palabras del general Mercado Jarrín, ministro de Relaciones Exteriores, en un discurso en la ONU en septiembre de 1969:

Los conceptos de bienestar, desarrollo y seguridad están pues estrechamente relacionados entre sí, puesto que la miseria y la explotación que se hallan en la base de las naciones subdesarrolladas atizan una situación explosiva cuyas consecuencias no quiero dramatizar aquí con palabras excesivas [...] (citado por Julio Cotler, op. cit., p. 12).

En esas condiciones, el escándalo del acta de Talara (el acuerdo entre el gobierno de Belaúnde Terry y la IPC, que contenía concesiones increíbles a la compañía petrolera estadounidense) no será más que la causa inmediata de la toma del poder por los militares en 1968. Por supuesto, el nacionalismo será desde un principio uno de los ejes políticos centrales de la Junta semipopulista cuyo primer acto fue la expropiación de los bienes de la IPC (la refinería de Talara, etcétera) seguido de una serie de medidas proteccionistas (200 millas de aguas territoriales, etcétera) y más tarde, de otras nacionalizaciones (Cerro de Pasco Co., etcétera).

Sin embargo, este conjunto de medidas nacionalistas no logró cuestionar la dependencia misma, sino más bien volver a formularla en términos más propicios para la burguesía peruana. Así, en forma paralela a la nacionalización de la IPC, se firmaron acuerdos y concesiones petroleras con una serie de otras empresas norteamericanas transnacionales: Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Belco Petroleum, Getty Oil, Standard Oil of Indiana, etcétera.¹⁷

¹⁷ En un artículo intitulado "Oil Boom in the Andes", la revista norteamericana *Newsweek* señala: "Pese al hecho de que el régimen militar peruano expropió a la International Petroleum [...] está abriendo el país a las compañías extranjeras [...] Por el momento, por lo menos, Perú, Ecuador y Colombia parecen dispuestos a otorgar la primacía a la producción de petróleo antes que al fervor nacionalista." *Newsweek*, 18 de octubre de 1971.

Por otra parte, el gobierno militar peruano firmó en 1969 un contrato con la Southern Peru Copper para la explotación de los yacimientos de Cuajone, que son de los más ricos del mundo; el cobre, por lo demás, es una de las principales exportaciones peruanas (234 millones de dólares en 1969, por solamente 10.9 millones para el petróleo).

Diversas y repetidas declaraciones del general Velazco Alvarado, presidente de la Junta, muestran claramente los límites del nacionalismo peruano y su negativa a una ruptura global del sistema de dependencia. En un discurso del 28 de julio de 1968, el general señalaba:

El desarrollo de América Latina necesita del capital extranjero. Pero ese capital no acude aquí por razones filantrópicas. Acude por interés. Se trata pues de un interés mutuo que debe normalizarse de modo claro y justo para provecho de ambas partes.

Esta moderación explica a su vez por qué las autoridades estadounidenses contemplan con cierta comprensión el desarrollo de regímenes militares como el peruano; en su informe al presidente Nixon en 1970, Nelson Rockefeller escribía:

Está surgiendo un nuevo tipo de militar que se convierte a menudo en un factor poderoso de evolución social en las Repúblicas americanas. Este nuevo militar, motivado por una creciente impaciencia debida a la corrupción, la ineficacia y el estancamiento del orden político, se propone adaptar su tradición autoritaria a finalidades de progreso económico y social.

Entre las transformaciones sociales acometidas por la Junta, la más importante fue sin duda la reforma agraria. Al limitar la propiedad rural a 200 hectáreas en la costa y a 165 en la sierra, el gobierno militar eliminó el fundamento socioeconómico de la antigua oligarquía rural; por otra parte, mediante el sistema de las indemnizaciones (los bonos de la deuda agraria deben invertirse en la industria), obliga a que los hacendados expropiados se conviertan en capitalistas industriales.¹⁸

Los considerandos de la ley recalcan que los objetivos de la reforma agraria consisten, aparte de la "justicia social en el mundo rural", en contribuir de manera decisiva a la formación de un amplio mercado y en suministrar los capitales necesarios para una rápida industrialización del país. Se puede añadir a esos propósitos socioeconómicos una dimensión

¹⁸ Léase a este respecto Aníbal Quijano, *Caractère et perspectives de l'actuel régime militaire au Pérou*, mimeografiado, 1970, p. 15.

política, expresada por el general Montagne, primer ministro y ministro de la Guerra, el 19 de julio de 1969: "La ley de reforma agraria es un obstáculo para el avance del comunismo." Es aún demasiado temprano para captar si la reforma agraria peruana que se presenta ya como la más radical entre las que otorgaron "desde arriba" (para distinguirla de las reformas impuestas "desde abajo" por los campesinos como en México y en Bolivia) alcanzará o no esos objetivos.

El ejército peruano funciona en cierta medida como un partido político de nuevo tipo, con sus "militantes" uniformados, su "comité central" —la asamblea jerárquica de las tres armas—, sus diferentes alas y tendencias ideológicas, etcétera. Empero, no puede cumplir con todas las tareas de un aparato político: movilización/neutralización y encuadramiento de las masas populares, etcétera. De ahí que el Estado militar peruano tenga que darse instrumentos civiles capaces de sustituir a los partidos políticos o a las organizaciones sindicales tradicionales o de hacerles la competencia: la Confederación de Trabajadores Revolucionarios de Perú (CTRP), el Movimiento Laborista Revolucionario (MLR), etcétera (el término revolucionario se refiere a la revolución peruana iniciada en 1968). La más importante de esas instituciones es el SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social) creada en 1971 y dividida en ocho regiones correspondientes a las regiones militares, en que el comandante militar es al mismo tiempo el jefe del SINAMOS; el propósito de esta estructura es asegurar el encuadramiento de la población en una base local (granjas, cinturón de miseria, barrios) e integrar al aparato de Estado los sindicatos, ligas campesinas y demás asociaciones populares.

Los motines populares de febrero de 1975 en Lima demostraron la relativa ineficacia de esas instituciones; por otra parte, los conflictos internos cada vez más agudos dentro de las fuerzas armadas parecen indicar una crisis del régimen militar (derrocamiento de Velasco Alvarado, etcétera).

CONCLUSIÓN

Después del 25 de abril en Portugal, muchos observadores se planteaban si el "movimiento de los capitanes" portugueses iba a seguir o no la "vía peruana". Actualmente se comienza por lo contrario a interrogarse acerca de la posibilidad de ver surgir fenómenos semejantes al MFA en América Latina.

A nuestro parecer, el MFA es el resultado de la conjunción de cierto número de factores específicos de Portugal que tienen pocas oportunidades de hallarse de nuevo en América Latina:

- a] La crisis de hegemonía de un régimen corporativista totalmente anacrónico, incapaz de garantizar un desarrollo económico y social real;
- b] La existencia de un ejército en guerra, con un sistema de reclutamiento universal que presentaba cierta debilidad política de los cuadros profesionales con respecto a la masa de los soldados reclutados;
- c] La crisis ideológica del cuerpo de oficiales, resultante del estancamiento de diez años de una guerra colonial perdida de antemano;
- d] La introducción en las fuerzas armadas de oficiales "supletorios" de origen civil (los milicianos) para completar el encuadramiento de los oficiales de carrera, que se había vuelto insuficiente. Esos oficiales "civiles", de origen estudiantil, introducirán un fermento de desagregación ideológica en el seno de la jerarquía militar.

Negar la posibilidad, a corto plazo, de un MFA latinoamericano no significa que las fuerzas armadas y el cuerpo de oficiales permanecerán siempre inmunizados en contra de la crisis ideológica por la que atraviesan los aparatos ideológicos (Iglesia, Universidad, etcétera) o políticos (partidos de masa, etcétera) del continente. Sin embargo es probable que esa crisis sólo tomará formas radicales (análogas a la del MFA portugués) en sectores minoritarios y marginales de la jerarquía militar. En el futuro próximo, la mayoría de los oficiales de carrera seguirá escogiendo entre el semipopulismo militar, la retirada parcial de la escena política o la instauración de un Estado de dominante coercitivo (también pueden establecerse combinaciones híbridas entre esos tres modelos: Argentina 1974-1975).

Resulta difícil determinar con precisión si esta reducción del abanico político de las principales elecciones para las fuerzas armadas latinoamericanas es el resultado de factores sociales (origen de clase del cuerpo de oficiales), económicos-corporativos (los "privilegios de casta") o ideológicos (conservadurismo autoritario de la formación de los militares). Lo más probable es que se tratará de una fusión de esas diversas determinaciones. A juzgar por las probabilidades, el resultado concreto es que las fuerzas armadas seguirán siendo en lo futuro, como durante los últimos quince años, los guardianes del orden establecido, modernizadores, reformadores y represivos.

[Tomado de *Tiers-Monde*, n. 68, octubre-diciembre 1976. Traducción de Oscar Barahona y Uxoá Doyhamboure.]